

# Ecuador

*Valeria Coronel*

■ Doi: 10.54871/ca25es5b

**Primer interrogante:** ¿Qué procesos sociopolíticos cuestionan a las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno y los Estados nacionales, y qué aportaciones instituyentes refuerzan políticas de pertenencia comunitarias?

**Valeria Coronel:** Me voy a referir a una periodización que nos permite comprender cómo la relación entre etnicidad, o grupos identificados como indígenas o afrodescendientes, denominados contemporáneamente “eticidades”, ha evolucionado con el Estado nacional. Esta relación no surge únicamente en el contexto de los movimientos sociales de la última parte del siglo XX e inicios del siglo XXI. En el marco del multiculturalismo existe una larga historia y proceso de interlocución, e incluso, de formación mutuamente constitutiva entre la organización identitaria y política de grupos indígenas y grupos afrodescendientes. El tratamiento del problema de la clase y la raza surgieron conjuntamente a inicios del siglo XX y fueron parte del proceso de formación del Estado Nacional en el Ecuador.

Para abordar la primera pregunta, es importante distanciarse de la noción de que la etnicidad fue reprimida durante el siglo XIX y XX, emergiendo únicamente en el contexto de la crítica y el escepticismo hacia los procesos democráticos y la formación de los

Estados nacionales mestizos. Es solo cuando éstos son criticados en el contexto de la política del reconocimiento, la política identitaria y el discurso filosófico posmoderno, que la etnicidad se vuelve visible. Es decir, es en el momento en que el Estado nacional es cuestionado que la etnicidad emerge como un tema destacado.

De hecho, esta perspectiva plantea un desafío al pensar en sociedades donde, según Zavaleta Mercado, existe una relación compleja y entrelazada entre los grupos étnicos. No se trata simplemente de sociedades donde hay intercambio profundo, sino también donde la identidad misma es estratégica. Un actor puede identificarse con genealogías étnicas en ciertos contextos y territorios, pero asumir otras identidades estratégicas en otros. Las identidades son flexibles y las sociedades son inherentemente heterogéneas y complejas en su estructura. Además, Zavaleta Mercado plantea el concepto del “poder dual”, que es relevante no solo para entender Bolivia, sino también para la región andina en su conjunto. Este concepto refleja la coexistencia de diferentes nociones y acumulaciones de poder.

Tanto la presencia de las comunidades indígenas en el marco del desarrollo capitalista como sus redes de parentesco han sido fundamentales. No solo han actuado como entidades subsidiarias de la economía capitalista, sino que también han logrado articular sus redes en diferentes niveles ecológicos, políticos y económicos. Estas comunidades han acumulado recursos dentro de sus territorios y han establecido liderazgos políticos para coordinar extensas redes poblacionales, enfrentando desigualdades sociales y constituyendo economías colectivas. La noción de identidad estratégica, ampliamente discutida en la Academia Andina y especialmente ejemplificada en Ecuador, refleja cómo estas comunidades, lejos de estar apartadas del mercado, desarrollan estrategias de asentamiento en diversos entornos ecológicos y económicos. Lo notable es cómo han logrado coordinar políticamente estas redes, acumular recursos económicos y competir en el mercado, convirtiéndose así en importantes fuerzas políticas.

Entonces, para trazar la relación entre etnicidad, las comunidades políticas y los Estados nacionales, es necesario reconocer la complejidad de las estrategias de resistencia, adaptación e incluso competencia en el proceso histórico de formación del capitalismo. Estas redes de desigualdad social, asentadas en múltiples escenarios estratégicos, también funcionan como redes de acumulación política y han tenido un impacto significativo en los procesos históricos.

Ahora, para ser más concisa, en el proceso de formación de los Estados nacionales, las guerras interpartidistas, la formación de milicias y las luchas internas dentro de los partidos políticos han sido partes integrales de las identidades políticas. Estas dinámicas han impulsado agendas particulares dentro de los partidos políticos, tanto en el marco de las guerras republicanas como en el proceso de reforma del Estado, lo que en México se conoce como el segundo ciclo de la Revolución. En la región Andina, especialmente en el caso ecuatoriano, hubo un segundo ciclo relevante durante las crisis mundiales entre los años veinte y el inicio de la Guerra Fría. Durante este período, las izquierdas y los liberalismos sociales jugaron un papel crucial en la reforma del Estado.

El hoy –mal conocido– Partido Comunista, durante el periodo de entreguerras, desempeñó un papel fundamental en la articulación de las comunidades indígenas con la formación de los derechos sociales. En el caso ecuatoriano, este partido influyó en los tres poderes del Estado, especialmente en el Parlamento, donde predominaba un bloque más democrático y de izquierda. Se promovió la representación de liderazgos étnicos, sindicales y de clase. El concepto de “voto funcional” incorporó la problemática étnica en la formación de los derechos sociales y en el nuevo tipo de democracia. Además, se transformó la noción cultural de la nación, que ya no se veía como un mestizaje homogeneizador, sino como una cultura de tensiones donde lo étnico y lo indígena no eran concepciones impuestas por intelectuales, sino emergentes de procesos de organización política popular.

Entonces, considero necesario alejarse un poco de la culpa que a menudo se instala en el pensamiento posmoderno y, sobre todo, en ciertas variantes del giro decolonial. Se cuestiona la idea de que los procesos de negociación política entre comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes, así como la negociación de la clase dentro de la nación, constituyan simplemente una imitación o una forma de opresión del mestizaje y la etnicidad. Es importante reconocer los procesos de democratización y lucha social que han tenido éxito e incidencia en la incorporación de ciertos elementos dentro del Estado, los cuales pueden ser activados en defensa de sus propios derechos.

Quisiera destacar la experiencia sumamente interesante de las décadas de los treinta y cuarenta, cuando se formó la Federación Ecuatoriana de Indios y, al mismo tiempo, se llevaron a cabo tres reformas constitucionales que tornaron al Estado más democrático y redistributivo. Se trató de un Estado regulacionista que gravaba impuestos a las transnacionales, reconocía el sindicalismo agrario y consideraba a las comunas como sujetos de derecho. Sin embargo, este proceso llegó a su fin, aunque más tarde se retoma con la Guerra Fría, que también trajo consigo golpes de Estado en países como Costa Rica, exterminio en Guatemala e intervenciones en Ecuador.

Estas nuevas fuerzas globales tuvieron impactos brutales en el sentido de negar la relación entre izquierda y democracia en los procesos latinoamericanos. Es decir, negaron el papel de las izquierdas en la formación de los Estados nacionales, los regímenes de bienestar y las formas de negociar la entrada de lo popular, la raza, la clase, el cuestionamiento al colonialismo interno, al imperialismo, al capital transnacional y al fascismo; negaron eso y plantearon, una versión recortada y reducida de democracia en la que se separaba el trabajo de las izquierdas y, por tanto, también el trabajo de las comunidades étnicas y de clase con la historia partidista, tanto el republicanismo radical, el Partido Rojo, el Partido Socialista, el liberalismo social y el Partido Comunista, fuerzas políticas en las que participaron, se integraron y se organizaron,

pero sobre todo dialogaron desde sus propias contradicciones. Sin embargo, esta historia fue sometida a una amnesia a partir de la Guerra Fría, y más aún durante este periodo. Esto no ocurrió por casualidad; al mismo tiempo que se planteaba una relación tutelada de las democracias latinoamericanas y un escepticismo sobre la existencia de una matriz de democracia o de socialismo democrático propios en América Latina, se promovió no solo la separación de las izquierdas, sino también un programa cultural asociado a la folklorización de la etnicidad. El relativismo cultural, como paradigma de la antropología, no solo fue un enfoque académico antirracista, como lo fue en su momento Franz Boas frente al racismo eugenésico del fascismo, sino que también sirvió como instrumento para que los aparatos que acompañaron a la institucionalidad del fomento y del desarrollo del tutelaje democrático a partir de la organización de 1948, como la formación de la Organización de Estados Americanos en Bogotá, llevaran a cabo una campaña para separar la cultura étnica de la política.

Entonces, el relativismo cultural contribuyó a producir una visión exotizada y despolitizada de comunidades que habían sido parte de la historia política en la formación de los Estados nacionales. Las izquierdas de los años setenta, como el marxismo estructuralista, hicieron un gran aporte académico que no podemos discutir ahora. Sin embargo, insistieron en la idea de que las relaciones de clase y etnicidad eran colaboracionistas, lo cual llevó a considerar a las izquierdas de los años veinte, treinta y cuarenta como colaboracionistas. Tanto el relativismo cultural de la Guerra Fría como las izquierdas estructuralistas, no ayudaron a comprender la profunda relación entre etnias, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y el problema de las clases organizadas en la constitución de los Estados nacionales, que habían sido parte de nuestra historia.

En el contexto del neoliberalismo, sobre esa amnesia, se construyó la noción de que el Estado nacional había surgido en contra y a espaldas de las comunidades, y que estas no habían contribuido

en nada hasta que empezaron a hablar por sí mismas. Se propuso una política de identidad más particularista, mientras se desmantelaba la educación pública y se entregaba parte de ella a liderazgos apoyados transnacionalmente. Esto generó una lucha importante contra el efecto devastador del neoliberalismo, pero también condujo a negociaciones problemáticas con regímenes liberales que ofrecían parcelas del Estado en contextos de desmantelamiento de lo público.

El movimiento indígena ecuatoriano tiene dos elementos sustanciales. Por un lado, una trayectoria ligada a la noción de lo popular y de la clase social, que articula la disputa contra el colonialismo interno y el racismo, reconociendo una trayectoria política indígena. Por otro lado, hay un sector que negocia incluso en este contexto contemporáneo, en el que se está llevando a cabo un juicio político en Ecuador. Existe un debate significativo sobre si negociar adecuadamente con un gobierno que ha desmantelado todo es lo correcto para un movimiento popular. Estos dos elementos representan una trayectoria radical de izquierda, reformista, transformadora y revolucionaria en un sentido histórico, que aún persiste en el movimiento indígena, y su negociación tensa con los procesos de formación estatal contemporáneos, así como un sector que negocia fragmentos del Estado desde la apuesta y la hegemonía neoliberal, influenciado por el relativismo cultural y el multiculturalismo.

**Segundo interrogante:** ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras y a qué reacciones se enfrentan?

**Valeria Coronel:** En este momento se ha complejizado el terreno de los sujetos portadores de comunidades de pertenencia emancipadora. La existencia del movimiento feminista o un movimiento feminista que atraviesa ahora varias generaciones y es también popular; atraviesa varios movimientos sociales y creo que eso es fundamental. Pienso que, para referirme a esto de los sujetos

portadores de comunidades políticas de pertenencia, no me restringiría solamente al problema étnico, por eso mencioné el movimiento feminista.

Quisiera plantear “la paradoja del movimiento obrero”. El movimiento obrero es un sujeto portador de pertenencia. Identifica el concepto de clase como una caracterización que es a la vez universal, porque es la humanidad en su sentido más amplio, pero también es relativamente particular. Es la idea de los desposeídos de la sociedad. Eso es un poco teórico, pero en términos de la formación histórica del movimiento obrero en el Ecuador, existe, es un sujeto de pertenencia y es indispensable dentro de todo proceso emancipatorio.

La paradoja del movimiento obrero es que surge de una manera muy interesante. Inicialmente se constituye como un movimiento sindical y luego como federación dentro del ámbito político de las izquierdas a largo plazo. Sin embargo, si se analiza su representación, al mismo tiempo que siempre se asume como legítima, no se trata de un sindicalismo perseguido. Incluso, hay un sindicalismo agrario que logra cierto impacto en procesos redistributivos de la tierra a lo largo del siglo XX, especialmente en las décadas del treinta, sesenta y setenta. Este impacto lo convierte en una fuerza de negociación y, por tanto, una fuerza emancipatoria en la disputa dentro de la misma sociedad de clases. No me imagino un sindicalismo emancipatorio capitalista, ni postnacional, ni postestatal, ni postpolítico. Creo que ese es un tema de otras disciplinas, tal vez.

En la contemporaneidad y en la modernidad de la sociedad de clases, el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores, es históricamente importante en el país y ha logrado garantías significativas. El Estado Nacional ecuatoriano ofrece garantías a la educación pública universal, libre y gratuita, y durante el periodo del progresismo del gobierno de la Revolución Ciudadana, también se incluyó el concepto de calidad. Todo esto forma parte de las emancipaciones en el sentido de garantías y derechos obtenidos por los movimientos y organizaciones emancipatorias, como se les llama

aquí, de clase en este caso. Sin embargo, al mismo tiempo, su legitimidad, su impacto y su éxito han llevado a que tengan representantes y un proceso de organización jerárquico que no necesariamente integra a las mayorías de los trabajadores informales, que en este momento representan una de las mayores crisis nacionales, con más del 63 % de la población.

Entonces, si bien ha sido una fuerza política, no debemos centrarnos únicamente en la intensidad de la identidad étnica. Quise mencionar esto porque son una organización de pertenencia, y la clase es una categoría que también debemos considerar como una categoría de pertenencia, particular en términos de la lucha contra la opresión y la desposesión, y universal en el sentido de que representa a la mayoría de la humanidad. Sin embargo, su legitimidad y su historia política cercana al Estado les han otorgado una representación que, hasta cierto punto, también puede ser restrictiva, ya que no están realmente conectados con las mayorías de los trabajadores desposeídos que son informales, en condiciones en las que es muy difícil que los representen. Entonces ahí hay un alcance de estas organizaciones o comunidades políticas de pertenencia, pero un límite también por el mismo hecho de haber tenido éxito y legitimidad, su desconexión con lo popular a un nivel más estructural y de las grandes mayorías.

En ese sentido, la relación entre los intentos de proceso ha sido algo tensa. Han surgido tensiones políticas significativas, especialmente entre las organizaciones sindicales, como la Central de Trabajadores y el Frente Unitario de Trabajadores en el país, y los gobiernos progresistas. Esto se debe a que los gobiernos progresistas pugnaban por políticas relacionadas con la formalización del trabajo, lo que a veces implicaba pasar por alto a estas dirigencias. Como resultado, las dirigencias percibían esto como un golpe político a la comunidad política organizada del mundo del trabajo. El hecho de que los gobiernos progresistas abordaran directamente el problema laboral sin considerar la representación de las organizaciones sindicales o del Frente Unitario de Trabajadores, dejaba a los



trabajadores informales en una situación complicada. Estaban en el centro de un problema de representación entre las organizaciones sindicales y los Estados progresistas, donde ambos afirmaban no solo representarles, sino también incidir en su vida cotidiana.

Encuentro interesante destacar la tensa relación entre el mundo del trabajo y su organización con las comunidades indígenas de pertenencia, así como con las comunidades afrodescendientes. Aunque pueda sonar contradictorio con las ideas predominantes sobre identidad, considero importante subrayar el aspecto de la identidad de clase. Esto puede parecer irónico, ya que va en contra de la visión tradicional que considera las etnicidades como derivadas de raíces tribales. Sin embargo, las comunidades étnicas no surgen necesariamente de una raíz ancestral o tribal, como sugiere una lectura influenciada por la UNESCO y una etnología imperia lista. De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) plantea el problema de lo nacional no como un tema de origen tribal, sino como una genealogía en términos políticos. No se identifican genealógicamente, sino como nacionalidades que han luchado por sus derechos. Existe una relación estrecha entre las comunidades nacionales radicales, las cuales se consideran naciones políticas, y las nacionalidades históricas que tienen una identidad propia, no vinculada al poder político y definida por sus costumbres y lenguas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas se considera una confederación de nacionalidades históricas, lo cual no niega la importancia de la cultura, pero resalta su trayectoria de lucha contra la opresión. Han combatido la tiranía, la exclusión gubernamental y el racismo, buscando gobernar democráticamente. Sus organizaciones no tienen liderazgos genealógicos hereditarios, sino que funcionan como experimentos democráticos fundamentales en el país. Realizan elecciones, debates amplios e involucran tanto a hombres como a mujeres en sus procesos democráticos. Se construyen desde una perspectiva de lucha contra la opresión, tanto étnica como popular, identificándose como nacionalidades

históricas en una disputa continua. La democracia es un elemento constitutivo fundamental en sus prácticas, diferenciándose entre las comunidades de la sierra andina y las que se han forjado en territorios dominados por transnacionales, mineras, petroleras y programas conservacionistas en la Amazonía.

En estas zonas también existen organizaciones étnicas de diversos tipos, que en cierto momento mantenían una relación menos estrecha con el Estado nacional y mostraban tendencias más autonomistas. Esta diferencia es importante de destacar entre los componentes del movimiento indígena del Ecuador. En las regiones andinas, como hemos mencionado anteriormente, hay una disputa entre tradiciones más clasistas y nacional-populares, mientras que en la Amazonía la trayectoria es diferente debido a su historia de concesiones territoriales y negociaciones con el Estado nacional. Durante un tiempo, estas comunidades negociaban más con las empresas petroleras que con el Estado, pero en períodos más recientes han adoptado un enfoque más radical en favor de programas populares en lugar de negociaciones autonomistas territoriales.

**Tercer Interrogante:** ¿Cuáles han sido los modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia, en lo económico, político, cultural, ambiental y por escalas de actuación (local, nacional, internacional-global)?

**Valeria Coronel:** Para responder esta pregunta quisiera pensar un poco en el campo de fuerzas desde una perspectiva más estratégica. Creo que el modo en que se interroga aquí, sale un poco de la perspectiva más culturalista del problema, de los movimientos étnicos o de los movimientos sociales y les reconectan con la pregunta de la transición histórica contemporánea sobre el problema del Estado, que normalmente pareciera, digamos ideológicamente, que se les separa. Aquí, en estas preguntas, se integra la relación entre políticas populares y políticas de reconocimiento y Estado. Se nos exige pensar un campo de fuerzas más integral para ver

dónde suman estas luchas. Una agenda política, o sea un análisis político, no se hace leyendo el pliego de peticiones o el discurso, porque cada discurso puede ser el uno más bello que el otro, sino que hay que analizar dónde suma en fuerzas dentro de una disputa, en una transición histórica, un determinado movimiento. Es decir, no leer si es más utópico o más radical en su visión de futuro, sino ver dónde suma en el momento de movilizar fuerzas sociales e incluso discursos, en la contienda sobre una coyuntura política o una transición histórica a más largo plazo. Y en este momento estamos en el mundo y en Ecuador.

Mientras intento reflexionar desde Ecuador sobre una situación que afecta a todos los países, nos encontramos en una transición histórica muy seria. Se podría pensar en una transición democrática hacia una crisis, o bien en una profundización de una transición autoritaria hacia una crisis. Desde una perspectiva histórica, me recuerda a la década del treinta, e incluso a los años veinte y treinta, el período entreguerras en el que el mundo podría haber tomado un rumbo fascista debido a la crisis mundial, o bien un camino de reformas, expansión del Estado de bienestar, politización popular, organización y crecimiento político de los partidos, como ocurrió más en América Latina y menos en Europa en aquel momento. Hoy en día, nos encontramos en una situación similar, y especialmente en Ecuador, donde estamos inmersos en un proceso de juicio político que está determinando las fuerzas partidistas y los equilibrios dentro de ellas.

Es realmente interesante ver cómo en Ecuador existe un partido político que, en su fundación, se denominó como el brazo político del Movimiento Indígena del Ecuador. Este partido, la CONAIE, representa al movimiento indígena, y Pachakutik era su brazo político. En este contexto, cuando hablamos del cruce entre ambas realidades, observamos que, en esta coyuntura de transición, se debate si se continuará con una orientación neoliberal, lo que implica salvar el sistema bancario, desregular las normas del capital y del trabajo, privatizar funciones estatales y garantías, entre otros

aspectos propios de la apuesta neoliberal. Además, en un contexto de expansión de la economía informal y del narcotráfico, se plantea desregularlo todo, dismantlar el sistema público y abrir los canales no para la inversión extranjera, minera y petrolera, sino abrir aún más los senderos para la expansión del narcotráfico. Este programa se enfrenta a otro que, aunque tenso y lleno de conflictos y negociaciones inconclusas, podría considerarse teóricamente como un programa de hegemonía, basado en la negociación, el conflicto, la opresión y el avance en sistemas democráticos.

La sociedad busca tomar decisiones soberanas sobre sí misma, regular el capital y reconocer las economías populares, así como los derechos reclamados en varios ámbitos. Estamos inmersos en una disputa de transición de modelos desde 2019 o incluso antes, mucho antes. El neoliberalismo impactó en Ecuador en los años ochenta. En los noventa, el movimiento indígena del país demostró su importancia como actor político organizado en múltiples niveles. Defendía las condiciones de vida campesina, cruciales para la supervivencia urbana, y abogaba por derechos políticos en contra del dismantlamiento nacional.

Después de los eventos más recientes, quiero mencionar al menos una vez los estallidos de octubre de 2019. En ese momento estábamos inmersos en un contexto de un giro hacia el neoliberalismo como política pública y con un serio dismantlamiento de la institucionalidad. A pesar de que las tensiones entre Correa y el movimiento indígena se habían desplazado relativamente, en la propaganda neoliberal persistía el tema de la intolerancia política, tratando de desviar la atención del verdadero problema. Sin embargo, ya había indicios de que la crisis había afectado de otras maneras. Se produjo un movimiento importante, acompañado siempre por organizaciones populares urbanas, el movimiento de mujeres, la teología de la liberación y organizaciones históricamente solidarias, así como la movilización de barrios. Durante varios días, se llevó a cabo un levantamiento significativo para condicionar y detener en cierta medida el ajuste fiscal impulsado por el FMI y

el gobierno de Lenín Moreno. Después vino la pandemia y, en ese escenario, se implementaron una serie de medidas antipopulares. Mientras el cuerpo social sufría, la nación indígena mestiza, en su estética ecuatoriana, reflejaba una especie de nostalgia por el dolor del pueblo. Este dolor era real, era una crisis palpable. Todos vimos la mortandad, la necropolítica, la situación dramática del Ecuador. Y justo en ese contexto, se tomaron medidas neoliberales para flexibilizar el trabajo. Es decir, bajo el pretexto de una mal llamada “ley humanitaria”, los empresarios tenían la facultad de despedir, por “derecho”. Estoy hablando de esa corriente que la gente podría identificar.

El gobierno contemporáneo de Guillermo Lasso, que ha seguido la línea del neoliberalismo radical, ha perdido toda popularidad. Apenas cuenta con un 12 % de aceptación nacional y está enfrentando un juicio por peculado. Hay mucha información sobre redes de corrupción, pero no profundizaré en eso. Hubo un movimiento para condicionar, para contener, para rechazar esta política. Podríamos llamarlo un “estallido”, ocurrido en junio de este año. Luego vinieron las elecciones seccionales, donde se produjo una pérdida brutal para el proyecto neoliberal en términos de resultados electorales, cambiando por completo el mapa político.

En este contexto, nos encontramos ante un juicio político, donde nuevamente emergen, digamos, fuerzas en juego entre coyunturas y procesos de mediano plazo, como los estallidos y los cambios en el modelo de gobierno y Estado. Este es un momento en el que nos preguntamos: ¿cómo contribuyen las comunidades políticas de pertenencia en agendas de disputa geopolítica y nacional? Es decir, el problema del neoliberalismo autoritario o la ruta fascista, que ahora también está presente en América Latina, o una ruta de recomposición democrática de derechos, pero también ecologista, feminista y de política de reconocimiento. Estas tres dimensiones deben sumarse a las viejas trayectorias de la lucha popular y los proyectos nacional-populares. Ese es el compromiso que debemos exigir, ya que está en disputa en este momento. El juicio político en

la Asamblea Nacional del Ecuador es una representación microscópica, pero muy relevante, de esta disputa global.

Bajo esta coyuntura, podemos observar fracturas dentro del movimiento indígena. Principalmente, el movimiento indígena busca oponerse al programa neoliberal y al gobierno de Lasso. Sin embargo, un sector del liderazgo dentro del movimiento propone una postura negociadora. Aunque reclaman negociaciones sustanciales y no solo migajas, su enfoque está en obtener buenos ministerios y otros beneficios. Este enfoque particular, que fortalece la comunidad política de pertenencia ligada al Partido Indígena, puede ser progresista y democratizante o puede perjudicar al conjunto del pueblo ecuatoriano al enfocarse en negociaciones específicas. Eso es lo que quería destacar.

## Debate

**Pregunta:** Me gustaría saber cómo es el papel del sector de los indígenas y también de los afroecuatorianos. ¿Cómo ves tú esa posibilidad más allá de la Revolución Ciudadana, sino del Frente Amplio, que sería posible? ¿Tú crees que pueda abarcar líderes afros e indígenas para conquistar el poder? Una cosa es quizás el poder a través de las urnas y mantener la presión en la calle.

Otro tema es la violencia y el crimen organizado. Para 2011 había cinco muertos por cada 100 mil habitantes debido a la violencia, ahora son 25. Se ha aumentado por cinco debido al narco mexicano. La respuesta a la crisis social es poner narcos por todos lados y crear un estado de terror para que se mantenga el neoliberalismo. ¿Cómo sobrevivimos dentro de la violencia?

**Valeria Coronel:** Efectivamente, estamos en una crisis sin precedentes. Es decir, la violencia ha aumentado porque, como dices, ahora hay 25 muertos por cada 100 mil habitantes, lo cual es un incremento brutal. Están desmantelados todos los servicios públicos.

Para darte un indicio que para otros podría parecer frívolo, pero para el trabajo en educación es importante: ¿has intentado ir a la Biblioteca Nacional del Ecuador y pedir servicio para los estudiantes? Estamos cerrados desde la pandemia. Hace año y medio en todo el mundo ya se están abriendo las cosas y todo está volviendo a la normalidad. Aquí todo sigue cerrado y lo único que está abierto son los canales para la negociación minera y las rutas del narcotráfico, como en Colombia. Colombia no ha sido desalojada por el narcotráfico, pero existe un gobierno que está implementando políticas territoriales y políticas con las comunidades. Está reconstituyendo la relación entre el Estado y el tejido social que ha sobrevivido en resistencia.

En este contexto de complejidades, el lavado de dinero del narcotráfico se arraiga en los puertos informales y la pobreza, exacerbando el abandono social. Esto ha dado lugar a la aparición de niños sicarios, algo que antes no se veía, y a una falta de experiencia para abordar el problema. Además, persisten los estereotipos más tradicionales y cómodos de una sociedad que solía considerarse relativamente segura, como una isla de paz y democracia en contraste con la guerra en Colombia y los procesos autoritarios en Perú.

Ecuador solía estar arraigado en la tradición de la revolución alfarista, con una marcada tendencia hacia la socialdemocracia o la izquierda. Sin embargo, hoy en día, los términos habituales parecen insuficientes para describir el horror que enfrentamos. Este cambio se intensificó durante la pandemia, lo que supuso un golpe brutal. Ahora, ¿qué perspectivas se abren ante nosotros? Lo más destacado es la posibilidad de una articulación de las fuerzas de izquierda en Ecuador. La tragedia del país radica en la persistente brecha entre estas fuerzas. No es que falte una trayectoria en el movimiento, ya que el movimiento indígena tiene un alcance y una movilización nacional, respaldado en las calles y en momentos cruciales que han condicionado el poder, en alianza con la Revolución Ciudadana tanto en las calles como en la Asamblea, donde tienen un importante bloque parlamentario. Han respaldado proyectos

de ley y han mantenido posiciones convergentes en diversos frentes junto al movimiento indígena. Sin embargo, al mismo tiempo, persiste una distancia y una negativa a negociar, lo que refleja un discurso de rechazo a la formación de un frente conjunto, a pesar de compartir objetivos comunes.

En la movilización, se actúa de manera conjunta y de repente nos encontramos en este juicio político, que no es un asunto menor. De pronto, no se discute la posibilidad de no articularse o de no votar del mismo lado. De hecho, para algunos dirigentes indígenas, la razón por la que se oponen al gobierno de Lasso es porque representaría una victoria contra el representante del neoliberalismo más destructivo en ese momento. Lasso está acusado de diversas irregularidades y su modelo es considerado tan destructivo que ni siquiera la misma derecha lo identifica como un modelo de derecha, sino más bien como un modelo de cártel o de un grupo en particular. Como se lo cuestionó en las calles, se lo cuestionó en el voto, se lo cuestionó en dos o tres levantamientos importantes. Como se le cuestiona en todos lados, pero cuestionarlo a nivel del voto.

Se dice que los dirigentes indígenas que promueven no votar por la destitución de Lasso argumentan que destituirlo sería otorgarle una victoria a la Revolución Ciudadana, facilitar su retorno. La campaña de Yaku Pérez también se enfocó en esa dirección. Es decir, el reformismo y el progresismo son percibidos como enemigos acérrimos, incluso más que la derecha, porque con ellos se puede negociar, pero no con la banca, no con el dictador. La idea de que la radicalización, la democratización y la intervención del Estado en la economía son equiparadas a la dictadura, es un discurso tradicional de la derecha, el conservadurismo y el neoliberalismo. Ese es también el discurso predominante. No estoy negando que haya habido conflictos importantes y creo que uno de ellos fue crucial y un límite.

Creo que uno de los puntos más graves que afectaron al movimiento de la Revolución Ciudadana y al gobierno de Rafael Correa fue el intento de promover la minería en territorios étnicos



sin tener en cuenta los habitantes de estos territorios. No estoy diciendo que no se necesitaran recursos energéticos, ni que debamos desatender la industrialización en algunas áreas a costa de una ecología desprovista de personas. Esa no podía ser una política soberana. Se intentó incluso negociar una política ecológica a nivel mundial, pero no obtuvo respaldo. En este país pequeño tampoco estamos dispuestos a sacrificar nuestras tierras para preservar el medio ambiente. Sin embargo, no se podía imponer la minería en los territorios de manera coercitiva como se intentó. Siempre el líder tiene que integrar las demandas y representaciones de manera justa. Ahí fue donde se presentó un grave conflicto en la relación entre el movimiento indígena y el gobierno de Correa. Pero eso ocurrió hace más de una década. Es decir, eso sucedió antes, mucho antes.

No se puede culpar a eso por todo lo que está ocurriendo ahora, que es un programa neoliberal en las calles y en las urnas. Y todos celebraron que una parte del apoyo fue para el movimiento indígena y otra para la Revolución Ciudadana, y que la derecha retrocedió en Guayaquil y en Guayas, que era su bastión natural, y que retrocedió a pesar de tener el control del gobierno en toda la Sierra Central. La derecha y los partidos de derecha retrocedieron notablemente en las elecciones. Estamos juntos en la calle, estamos juntos en los programas de reformas del Estado, pero sobre todo para impedir la reforma.

Por ejemplo, la entrada de un instrumento clave que podría comprometer la soberanía en términos de seguridad, como lo es la extradición. Saben que esto podría llevar a la implementación de un “Plan Ecuador” diseñado fundamentalmente desde el exterior, con control de la información y del territorio desde fuera. Lasso perdió el plebiscito por un voto mayoritario y masivo, impulsado por la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Todos estamos de acuerdo en esto, pero en el momento de tomar la decisión definitiva, en este momento crucial, se retrocede, porque eso podría

facilitar que uno de los dos partidos, que es el mayoritario, tome la delantera.

Entonces, la tragedia del Ecuador radica precisamente en el largo plazo de nuestras tradiciones de izquierda. El hecho de que todas son fuertes y provienen de distintos estilos de negociación, generando rencillas internas y tensiones no resueltas que obstaculizan la unidad. Aunque la oligarquía, por así llamarla y rescatando el lenguaje histórico de América Latina, sea más inepta para hacer pactos y construir un Estado coherente, se ve inmersa en disputas internas similares a cárteles, sin lograr una unificación. Su fuerza no radica en mantener un programa unificado. Tal vez cuenten con apoyo transnacional, pero entre ellos mismos no pueden consolidar un Estado coherente. Más bien, desmantelan lo que pueden y se enfrentan entre ellos, exponiendo sus diferencias públicamente. Por eso se exponen sus conflictos. No es su fortaleza lo que los mantiene en pie, sino la incapacidad hasta ahora de construir un frente popular, un frente amplio que proporcione una salida viable para esta nación.

**Pregunta:** Siempre me ha parecido que Ecuador es un país que ofrece momentos políticos interesantes para entenderlo desde una perspectiva comparada. Sin embargo, ahora ha vuelto a una cierta inestabilidad y a una mayor polarización política, especialmente evidente durante los últimos años, sobre todo en tiempos de pandemia. Bajo ese contexto tengo tres consultas muy concretas que quizás tengan cierta sinergia.

Primero, quiero abordar el problema de la seguridad y la gobernanza en ese ámbito. Ecuador no estaba inserto en las redes de criminalidad como en Colombia y Perú, donde estas redes están instaladas por el narcotráfico. Me sorprendió y preocupó mucho que, de un momento a otro, estallara toda esta ola de violencia en la costa ecuatoriana. ¿Qué tanto crees que este nuevo problema público se acentúa en la agenda gubernamental? ¿Crees que Ecuador vaya hacia un enfoque más centrado en el manejo de este problema

público que parece estar escapándose de las manos del Estado debido a la inestabilidad política y las fuerzas encontradas?

El segundo tema es el aspecto económico. Ecuador está entrando en una situación de riesgo país, justo en un momento en que se discute el tema de Bolivia. Esta preocupación, sobre todo por el impacto que puede tener, podría llevar nuevamente a un ciclo de ajustes económicos y reducción del gasto público. ¿Cómo crees que esto pueda generar algún tipo de estallido social, considerando que Ecuador es muy propenso a esto en momentos de crisis económicas?

Finalmente, me interesa conocer cómo se concibe ahora el rol de la ciudadanía en Ecuador, sobre todo teniendo en cuenta los aspectos de mayor preocupación como la economía y la seguridad. ¿Cómo percibe la ciudadanía esta situación actualmente, especialmente después del proceso electoral donde el movimiento Alianza País logró cierto retorno al poder? ¿Crees que el correísmo pueda regresar al poder y cómo podría influir esto en la dinámica política del país?

**Valeria Coronel:** No voy a extenderme demasiado, pero considero problemático pensar que la sociedad está interpelando, cuestionando, deslegitimando y sometiendo a juicio al gobierno de Lasso porque no puede controlar el narcotráfico. Esa no sería la razón principal. Más bien, la sociedad está cuestionando la imposibilidad y la falta de voluntad del gobierno no solo para controlar el narcotráfico, sino también debido a indicios y acusaciones de peculado. Junto con el tema del peculado, se han presentado una serie de documentos importantes que están en manos de la Fiscalía, aunque esta también está relativamente influenciada. Si bien las estrategias actuales son diferentes a las de los años setenta, existe un control del Poder Judicial que, sin embargo, revela una complicidad en lugar de una falta de control.

Por otro lado, hay complicidad con una parte del negocio del narcotráfico, no con la totalidad, ya que esto no es un Estado o un

Imperio, sino más bien un conflicto entre cárteles. Hay guerras entre cárteles en las cárceles, lo que ha cobrado más vidas que nunca en la historia de Ecuador. Semanalmente, hay muertes en las cárceles debido a estas disputas entre cárteles. La situación de la policía y las fuerzas represivas es muy compleja. Durante al menos dos años, la Policía ha estado involucrada en escándalos por femicidios, corrupción y narcotráfico. La propia policía forma parte del problema y, además, está desabastecida en ciertos aspectos. A pesar de que hay fondos disponibles, no se han utilizado para modernizar y equipar a la policía. En cambio, la policía se ve afectada por su conexión con el narcotráfico, la corrupción y condiciones de autoritarismo. Por otro lado, parte de la policía tiene demasiado poder.

En fin, están tratando de desplegar a los militares en las calles. Actualmente, tienen una política que declara como terrorismo cualquier acto de protesta. De hecho, hay una amenaza casi directa de que si surge una nueva movilización social, que es un recurso histórico en Ecuador, la respuesta no será solucionar las necesidades básicas de la población, sino reprimirla. Las movilizaciones sociales no ocurren por hambre únicamente, sino que también son un instrumento político. El hambre está presente hoy más que nunca.

Pero no es que hoy vaya a haber más movimientos porque hay más hambre, pienso yo. Es un instrumento político de la organización popular, reconocido por los Estados. Es parte de nuestro repertorio y va a volver, pero hoy ya existe la amenaza de que cualquier movilización sea declarada como terrorismo, como si fuera parte de la situación de inseguridad privada. Esto es una transformación que está ocurriendo. El gobierno decreta considerar como terrorismo cualquier situación que amenace la seguridad, tratándola como parte de las guerras del narcotráfico, que están afectando más bien a la misma sociedad civil, y eso es precisamente parte del rechazo que se va a expresar en la movilización.

Esto ocurre en medio de un juicio político, en medio de la más alta deslegitimación y violencia, con rencillas entre ciertos liderazgos de izquierda. El Gobierno emite un decreto para declarar

terrorista cualquier movilización y anticipa su respuesta. En este sentido, ¿cómo operaría contra cualquier delincuencia? Estamos ante un problema donde la gente no está cuestionando al gobierno y por eso este no sabe cómo actuar contra la inseguridad.

Habrán nuevos estallidos. La crisis grave tiende a generar más estallidos. A veces, son más que simples estallidos. Incluso diría que son instrumentos políticos acordados democráticamente, desde el nivel micro del movimiento indígena hasta el movimiento nacional. El movimiento indígena nacional está rechazando el gobierno de Lasso, está a favor del juicio político y hay un sector de ellos, del Pachakutik, que piensa apoyar a Lasso y que ha declarado que así lo va a hacer para que no pase el correísmo. Pero yo creo que el movimiento indígena sí está viendo la crisis de una manera más integral y estratégica, y muchos sectores del pueblo ecuatoriano acompañan los movimientos cuando esto sucede. Creo que con esto me voy a quedar. Hay una conjugación de distintos tipos de instrumentos de participación, y el movimiento y la movilización son uno de ellos.

El voto se ha ejercido ya para plantear que, en las últimas elecciones, en las principales ciudades del país tienen alcaldías por izquierdas, es decir, han tenido antineoliberales más que nada progresistas, otras tienen liderazgos. Del movimiento indígena también, precisamente por su compromiso y su raigambre democrático popular desde abajo y sus programas en torno a asuntos de interés colectivo y comunitario de la economía popular también y temas de representación histórica de ese de ese movimiento.

Las prefecturas clásicas de la derecha también han experimentado transformaciones. El ejercicio del voto es muy activo, y la ciudadanía participa de manera significativa en la política a través de él. Aquí la gente no es indiferente a la política. Entiendo que los frentes populares, cuando están compuestos por una amalgama de liderazgos clásicos, pueden obstaculizar la movilización subalterna y el control del poder fáctico que se siente en el país. Sin embargo, si las izquierdas representan fuerzas sociales, como sucede en

Ecuador, considerando al progresismo y al movimiento indígena como las principales fuerzas movilizadoras, es imprescindible que haya una negociación y un frente común para enfrentar la crisis en la que nos encontramos.